

EL FOBAPROA: UN COSTOSO EJEMPLO DE LA INCOHERENCIA EN LA POLÍTICA ECONÓMICA.

Ignacio Román - México

Cuando los discursos políticos nos refieren las bondades del libre mercado y la ineficiencia de la intervención económica y el proteccionismo, generalmente se desdennan los efectos sociales que el llamado libre mercado trae consigo. Lo que importa es favorecer la «competitividad» y esta sólo la pueden lograr quienes arriesgan su propio capital y no el de la sociedad (como lo hace el Estado). Por eso, para tener más eficiencia y capitales, se requieren las privatizaciones y la liberalización externa.

Si se trata de favorecer la competitividad, ¿qué pasa con los que no llegan a ser suficientemente competitivos?. En efecto, cuando se ha tratado de empresas micro, pequeñas y medianas privadas, se les ha dejado a merced del «libre mercado», con los ejidatarios está pasando igual, y las empresas paraestatales se han vendido o cerrado a nombre del libre mercado. ¿Qué expectativa les queda, por ejemplo, a los pequeños productores agrícolas (ejidatarios, comuneros, minifundistas, indígenas)? Vender o rentan sus tierras y convertirse en jornaleros o migrantes hacia las grandes ciudades de México y, sobre todo de Estados Unidos. Como jornaleros trabajarán en las condiciones más precarias de los asalariados del país; como migrantes en las grandes ciudades, difícilmente obtendrán un empleo digno, dadas las condiciones de discriminación, de escolaridad y, en general, de experiencia en el medio urbano.

En el extranjero, la apuesta es arriesgando su vida y siendo objeto de todo tipo de vejaciones y racismos. ¿Qué expectativa les queda a los micro y pequeños empresarios, así como a los trabajadores que ahí laboran?: ¿reconvertirse en comerciantes ambulantes y enfrentar a los establecidos, que a su vez enfrentan riesgos de quiebra frente a la competencia de los ambulantes?, ¿desarrollar actividades «subterráneas»?... cuando no se cuenta con capital o con trabajo las expectativas no son muchas. ¿Qué margen de maniobra le queda a un país para dirigir su destino, cuando no puede tener control sobre sus recursos naturales, sus medios de comunicación o sus sectores económica o socialmente estratégicos?

Sin embargo, el libre mercado no es absoluto. Difícilmente se aplica cuando puede afectar a los intereses económicos, y en especial financieros, más poderosos del sector privado. Tales han sido los casos de los rescates a las líneas aéreas, a las carreteras y, sobre todo, a los bancos. En estos casos el discurso de la eficiencia y del libre mercado se ha olvidado. Se privatizaron estos sectores para hacerlos «eficientes», pero su ineficiencia real está siendo pagada, al igual que si hubieran sido gubernamentales, por el conjunto de la sociedad. A diferencia de las paraestatales, los campesinos, los trabajadores urbanos o los micro y pequeños empresarios, a la banca, a las carreteras o a las líneas aéreas se les tuvo que rescatar, porque - éstas sí - eran estratégicas.

El costo, hasta ahora, del Fobaproa es de más de 650,000 millones de pesos, es decir el equivalente a casi 50 millones de salarios mínimos anuales (considerando 13.5 meses de pago anual), cuando en el país menos de 25 millones de gentes ganan más del salario mínimo. ¿De dónde salió tamaña deuda?.

Veamos un poco más a detalle: La privatización bancaria fue la más importante del gobierno de Salinas (21,500 millones de dólares) y los bancos se vendieron, principalmente a ex-dueños de Casas de Bolsa. Los nuevos banqueros se encontraban ante un problema serio: tener suficiente dinero para (i) pagar la privatización, (ii) prestar al público y pagar intereses (el dinero es un capital de trabajo para los bancos) y (iii) obtener ganancias cuantiosas, bajo la lógica de las Casas de Bolsa, la cual procura una altísima rentabilidad en el corto plazo, a costa de correr riesgos importantes.

La lógica bancaria debería ser la de rentabilidad en el largo plazo conforme crezcan las inversiones que financia. ¿Cómo conseguir el dinero suficiente?: (i) endeudándose, tanto a nivel nacional, para tener pesos, como internacional para contar con dólares y (ii) manejando un «margen de intermediación altísimo». El margen de intermediación es la diferencia entre la tasa de interés que le cobran los bancos a sus deudores y la que le pagan a sus ahorradores. En los países más estables, esta tasa es de alrededor de 5 puntos porcentuales. En México, en 1993, llegó a ser de 25 puntos. Con este margen, el aumento de los costos del pago de créditos para los deudores iba mucho más aprisa que el aumento de sus ingresos. Cada vez era necesario destinar una mayor parte de los ingresos de las personas para que pagaran los intereses de su deuda. Cuando este crecimiento se volvió insostenible dejaron de pagar y por lo tanto el Banco dejó de recibir el dinero que tanto necesitaba.

El problema de la «cartera vencida» no llegó con la crisis de 1994, sino desde antes. Ya en 1993 los problemas eran sumamente delicados. A lo anterior hay que agregar la aparición de prácticas fraudulentas entre los bancos y sector privado, así como la pobre vigilancia del gobierno. Se conocen diversos casos de formación de «empresas fantasma» a las que le prestaba el Banco, de «préstamos cruzados» de un Banco a otro, de «autopréstamos» a las empresas de los dueños de los bancos, de financiamiento a las campañas políticas del PRI (como las de Tabasco y la presidencial de 1994) etc. Si bien estas operaciones no representan el grueso de la deuda del FOBAPROA, si ilustran la lógica de «eficiencia», «competitividad» y «libre competencia» con que operaban muchos bancos.

Evidentemente, esto generó mayores pérdidas y acumulación de cartera vencida. La gota (o el torrente) que derramó el vaso fue el estallido de la crisis de 1994. Como parte de la deuda de los bancos estaba contratada en dólares, en un momento se fue a más del doble; con la devaluación, la inflación y las tasas de interés se dispararon y con ello las quiebras, despidos y la incapacidad creciente de los deudores para mantener sus pagos. Entre sus manejos de endeudamiento, sus políticas crediticias, sus fraudes y la crisis, gran parte de los bancos cayeron en riesgo de insolvencia para pagar los intereses de lo ahorradores.

¿Qué hacer?: una opción era la declaratoria de quiebra y que los ahorradores perdieran su dinero. Lo que hubiera ocurrido es que, al ver esta posibilidad, los ahorradores sacaran el dinero del país y México se quedase sin dólares para importar. Con la dependencia de México del «mercado global», esto hubiera sido una catástrofe aun mayor de la que ocurrió. La otra opción era salvar a los bancos (y abandonar la lógica del libre mercado). El problema es que es la sociedad la que lo tiene que pagar y ni siquiera se estableció un mecanismo para que en adelante los bancos se vieran obligados a prestar con mayor dirección hacia la producción y el desarrollo de esa sociedad (apoyo a crédito preferencia a micro, pequeña y mediana empresa, a la producción social, a la generación de empleos, etc); tampoco se estableció ninguna norma para evitar que se volvieran a las prácticas de márgenes de intermediación enormes, con poco premio para el ahorrador pequeño y un enorme costo para el deudor; tampoco se han facilitado los documentos que permitieran ver todas las irregularidades cometidas, ni se han establecido responsabilidades a las autoridades públicas que, por complicidad negligencia o ignorancia fueron incapaces de detener esta sangría financiera. De nuevo, en el discurso se vuelve a recurrir a la defensa del libre mercado.

En suma, existe un problema doble: el de la banca en si misma y el de una lógica incoherente en la política económica, donde se defiende una posición que ni el gobierno en la práctica puede asumir y por lo tanto lo aplica en función, no de la eficiencia, sino de los juegos de poder existentes. 6